



Asamblea General

Distr. general
29 de febrero de 2012

Original: español

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 61º período de sesiones, 29 de agosto a 2 de septiembre de 2011

Nº 36/2011 (México)

Comunicación dirigida al Gobierno el 29 de marzo de 2011

Relativa a: Basilia Ucan Nah

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo transmitió la mencionada comunicación al Gobierno.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta de un enjuiciamiento o una condena por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de recurso administrativo y judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento; el origen nacional, étnico o social; el idioma; la religión; la condición económica; la opinión política o de otra índole; el género; la orientación sexual; la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Presentaciones

Comunicación de la fuente

3. Basilia Ucan Nah, de nacionalidad mexicana, es una mujer indígena maya de 43 años de edad; monolingüe maya; analfabeta en español; originaria de la comunidad de Yoactún (municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo); madre de siete hijos; que fue arrestada el 18 de marzo de 2008 por agentes de la policía judicial del Estado de Quintana Roo, cuando se encontraba en su casa cuidando a su nieta. Permanece detenida en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), junto con otras 86 personas, de las cuales 85 son hombres. Todas estas personas han sido detenidas por la presunta comisión de delitos del fuero común.

4. De acuerdo con la fuente, el 6 de febrero de 2007 se recibió una denuncia telefónica anónima relativa a la presunta comisión de los delitos de lenocinio y trata de personas en contra de dos adolescentes de sexo femenino, explotadas sexualmente por un hombre de aproximadamente 70 años. El 7 de marzo de 2007 la policía presentó a Ambrosio Granados Mohedano —fallecido durante el proceso— y a Mary May, como probables responsables. May habría declarado trabajar con Granados Mohedano, explotando a dos menores de edad. Afirmó que “dos meses antes una señora gorda, morena, alta, de pelo largo hasta la mitad de la espalda, como de 40 años, se dedica a buscar jóvenes para llevarlas a la casa de Ambrosio Granados”. Dicha mujer la habría llevado también a ella. Por su parte, Granados habría referido que él únicamente rentaba los cuartos; que no sabía los nombres de las mujeres y que pedía a quienes usaban las instalaciones que no llevaran a menores de edad ni provocasen escándalos. Igualmente habría indicado que omitía el nombre de quienes le rentaban los cuartos porque eran personas que ocupaban funciones públicas en Felipe Carrillo Puerto, como trabajadores de gobierno o policías.

5. El 10 de abril de 2007, la policía judicial presentó su informe de investigación integrado por los interrogatorios realizados a las dos menores; a la hermana de una de ellas; a los probables responsables; y a una persona que tendría relaciones con una de las presuntas víctimas, quien posteriormente negaría los hechos.

6. El 26 de julio de 2007, Raquel Gómez Hernández y Basilia Ucan Nah fueron detenidas en la puerta del palacio municipal de Felipe Carrillo Puerto, por agentes de la policía judicial, quienes las condujeron a prestar declaración ante el Ministerio Público. Gómez Hernández declaró haber visto a Ucan Nah acompañar a una de las menores. Por su parte, Ucan Nah prestó declaración sin asistencia de intérprete ni de abogado defensor. Un agente de seguridad pública declaró posteriormente ante el juez de la causa que, pese a no haber estado presente en la declaración, aceptó firmar el acta como “persona de confianza” de Ucan Nah, a pedido expreso del Ministerio Público.

7. En una ampliación de declaración, una de las adolescentes señaló que conocía a Ucan Nah desde hacía dos años, cuando se le acercó en el mercado para decirle que un hombre le pagaría por tener relaciones sexuales en casa de Granados Mohedano.

8. El 10 de septiembre de 2007, el Ministerio Público solicitó al juez librar orden de aprehensión contra Ucan Nah y Granados Mohedano, como probables responsables de los delitos de lenocinio, trata de personas y corrupción de menores en agravio de las dos adolescentes y de la moral pública. El 11 de marzo de 2008, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto libró la orden de aprehensión contra Ucan Nah, quien fue arrestada el 18 de marzo de 2008 por agentes de la policía judicial de Quintana Roo. No se le mostró orden judicial ni se le comunicaron los motivos de su detención. El 19 de marzo de 2008 rindió su declaración preparatoria, afirmando que no conocía a las menores agraviadas y que los policías judiciales la habrían intimidado al decirle que la vigilaban y dándole nombres de mujeres —que ella no conocía— que se presentarían a declarar; hecho que nunca ocurrió.

9. El 24 de marzo de 2008 se dictó auto de formal prisión contra Ucan Nah, como probable responsable de los delitos de corrupción de menores y lenocinio. El proceso continuó principalmente con las declaraciones de testigos y de las dos menores. El 16 de septiembre de 2008 el abogado de Ucan Nah interpuso un recurso de amparo contra el auto de formal prisión, que fue denegado el 13 de noviembre de 2008.

10. El 16 de julio de 2008, una de las adolescentes presuntamente agraviadas, al ampliar su declaración, manifestó que no conocía a Ucan Nah y que, en consecuencia, no tenía nada que decir contra esa persona. Igualmente, manifestó que nunca había sido obligada a tener relaciones sexuales. Declaró que las actas de sus declaraciones anteriores no reflejaban lo que había declarado y que había sido obligada a firmarlas bajo amenaza de ser conducida al Tribunal de Menores. Con relación a las declaraciones firmadas por su madre, señaló que una Licenciada había ido a su casa acompañada de agentes de la policía judicial, quienes se habrían llevado a su madre para que firmara. Como ésta no sabía firmar, los agentes policiales habrían plasmado sus huellas digitales sobre el documento.

11. El padre de la otra víctima declaró en la misma fecha, manifestando que su hija fue presionada en su declaración de 8 de marzo de 2007 por agentes de la policía judicial, que la intimidaron y amenazaron, obligándola a decir cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Agregó que su hija, que era víctima de una crisis nerviosa, no había interpuesto denuncia contra persona alguna.

12. El 19 de septiembre de 2008 Mary May, una de las primeras declarantes, amplió su declaración manifestando que lo consignado en el acta de su declaración anterior era falso y que nunca había declarado en esa forma. Finalmente, manifestó que firmó dicha acta por temor y bajo presiones.

13. En febrero de 2009, Gómez Hernández amplió su declaración, manifestando que no era cierto que hubiese visto a Ucan Nah con una de las menores, tal como aparecía asentado en su primera declaración. Señaló que aceptó firmar por temor y porque prefería no meterse en problemas.

14. Según la fuente, las señas de la mujer que habría inducido a las presuntas víctimas no concuerdan con los rasgos de las fotografías tomadas a Ucan Nah para la ficha señalética.

15. El 23 de marzo de 2009 el Ministerio Público presentó sus conclusiones acusatorias. El 8 de abril de 2009 Ucan Nah presentó sus conclusiones absolutorias. El juez consideró dicha presentación extemporánea.

16. El 28 de abril de 2009 se dictó sentencia condenatoria en primera instancia contra la Ucan Nah, por la comisión de los delitos de lenocinio calificado y corrupción de menores, condenándola a la pena de 12 años con tres meses de prisión y al pago de una multa de 10.577,20 pesos.

17. El 27 de agosto de 2009 se ordenó la reposición del procedimiento debido a que muchas diligencias y notificaciones fueron realizadas sin la presencia de un perito intérprete traductor. Una nueva sentencia señaló que Ucan Nah no era responsable del delito de lenocinio y corrupción de menores en perjuicio de una de las adolescentes, pero sí en perjuicio de la otra menor (que habría hecho un inicial señalamiento directo contra Ucan Nah, pero que en su segunda declaración ministerial se retractó y afirmó no conocerla), manteniéndose la condena a 12 años y tres meses de prisión y al pago de la multa.

18. En el presente caso resulta evidente, según la fuente, la ausencia de pruebas y la fabricación de los delitos. El juez convalidó y utilizó en la sentencia las pruebas presentadas por el Ministerio Público que fueron recabadas de manera ilegal. Las supuestas agraviadas se retractaron de sus primeras declaraciones y afirmaron haber sido coaccionadas para firmas declaraciones que ni siquiera conocían. Ucan Nah nunca ha reconocido su presunta responsabilidad ni aceptado hecho alguno constitutivo de delito y ha negado conocer a las menores. Actualmente el caso se encuentra en apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo (expediente penal 458/2010).

19. El esposo de Ucan Nah, Félix Chi Cahuil, manifestó en rueda de prensa que, antes de la condena, unas personas que no pudo identificar, le pidieron la suma de 60.000 pesos para liberar a su esposa, dinero que no podía pagar por carecer de recursos suficientes.

20. La fuente agrega que la Subprocuradora de la Zona Maya, María de Jesús Loeza Cachón, acompañada de dos agentes judiciales, se presentó en una tienda comercial ubicada en Felipe Carrillo Puerto donde trabaja una mujer originaria de la comunidad de Yoactún, para coaccionarla a que realizara declaraciones perjudiciales para Ucan Nah.

21. La fuente concluye que las irregularidades detectadas en el proceso judicial contra Ucan Nah, tales como la ausencia de intérprete; la falta de abogado defensor en momentos cruciales del proceso; la actuación del Ministerio Público al recabar la pruebas; motivan que la detención de esta persona sea arbitraria. A ello se suma su estancia en la cárcel municipal, que no tiene un área específica para mujeres.

22. La fuente considera que la detención de Ucan Nah es contraria a la legislación mexicana e internacional. Los funcionarios judiciales, aduciendo el principio de inmediatez procesal, desestimaron las retractaciones de los declarantes, aun cuando los mismos hicieran manifestaciones expresas sobre coacciones, intimidaciones y amenazas ejercidas en su contra. Considera también que al exigirles pruebas concretas de inocencia y no culpabilidad, invirtieron la carga de la prueba y vulneraron el principio de presunción de inocencia. Prácticas ilegales del Ministerio Público durante las indagatorias fueron irregularmente validadas. Ninguno de los testigos que comparecieran ante el Ministerio Público hizo un señalamiento directo contra Ucan Nah, con la única excepción de la adolescente que posteriormente se retractó y que acusó al Ministerio Público de haberla presionado para firmar una falsa declaración.

23. Ninguna de las adolescentes declaró ante el Ministerio Público en compañía de sus padres, representantes legales, o de algún funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, requisito exigido por el Código Procesal Penal del Estado. Esta circunstancia las colocó en un contexto de vulnerabilidad y presión. Incluso una de las adolescentes denunció ante el juez de la causa haber sido amenazada por agentes de la policía judicial, advirtiéndole que si no firmaba el acta ya redactada, sería conducida al Tribunal de Menores.

24. Finalmente, la fuente considera que la detención de Ucan Nah es arbitraria porque no le fueron explicados los motivos de su detención, ni se le mostró orden del juez. El proceso se siguió en español, idioma que Ucan Nah no comprende, sin la asistencia de intérprete. Fue obligada a firmar actas que contenían declaraciones que no podía leer ni comprender. No contó con abogado defensor durante la averiguación previa y momentos

cruciales del proceso y un agente de seguridad pública, que no había estado presente en las declaraciones, aceptó firmar como persona de confianza como si hubiese estado presente.

25. Estas graves irregularidades procesales condujeron a Ucan Nah a una situación de indefensión permanente y sin cabal comprensión objetiva de la situación procesal penal que estaba atravesando ni de las implicaciones de las acusaciones en su contra. Esta persona ha sido injustamente privada de su libertad durante más de tres años, víctima de un proceso penal plagado de irregularidades violatorias de sus derechos humanos.

26. La fuente concluye que la detención de Ucan Nah es arbitraria.

27. Según la fuente, el proceso penal seguido a Ucan Nah muestra cómo el sistema de procuración y administración de justicia puede ser manipulado en el Estado de Quintana Roo para fabricar culpables y dar una imagen de firmeza frente a la delincuencia, aprovechando la vulnerabilidad social y económica de las mujeres indígenas.

28. La fuente solicita además el cese de hostigamientos contra personas vinculadas a Ucan Nah y contra los testigos del caso, particularmente por parte de la Subprocuraduría de la Zona Maya y de la Procuraduría del Estado. Denuncia que ante las graves irregularidades de procedimiento y la fragilidad del expediente penal, se ha iniciado una campaña de desprestigio contra Ucan Nah y de presiones contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo.

Respuesta del Gobierno

29. En su respuesta de 16 de junio de 2011 el Gobierno informa que Basilia Ucan Nah, desde su detención el 18 de marzo de 2008 dispuesta por el Tribunal Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, en el Estado de Quintana Roo, contó con todas las garantías del debido proceso contempladas en el marco jurídico mexicano así como en los tratados internacionales de los que México es parte; es decir, tuvo abogado defensor; se le dio a conocer el motivo de su detención; no estuvo incomunicada; entre otros.

30. Agrega el Gobierno que, luego que Ucan Nah fuera condenada en primera instancia por los delitos de lenocinio y corrupción de menores a 12 años y tres meses de privación de libertad, el Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia en razón de falencias de la prueba de inculpación, lo que se tradujo en su libertad incondicional el 24 de mayo de 2011.

31. Informa también el Gobierno que Ucan Nah interpuso una denuncia por la violación de sus derechos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la que fue transmitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se encuentra en estudio.

Observaciones de la fuente

32. En comunicación de 26 de julio de 2011 la fuente confirma la liberación de Ucan Nah por la revocación absolutoria dispuesta por el tribunal de segunda instancia, insistiendo en que en su proceso judicial hubo serias violaciones de los derechos humanos, como el hecho que en sus indagatorias no contó con intérprete de su lengua materna al español, idioma en que se siguió el juicio y que ella no domina. A juicio de la fuente, Ucan Nah fue víctima de tres discriminaciones: de género; por su condición de indígena; y por su bajo nivel socioeconómico.

33. La fuente cuestiona la naturaleza y contenido de las pruebas rendidas durante la instrucción y el juicio, que constituyen en su opinión serias violaciones a los derechos humanos.

Consideraciones del Grupo de Trabajo

34. Encontrándose ya liberada la persona por la que se ha recurrido, el Grupo de Trabajo podría simplemente archivar este caso por medio de una opinión; sin embargo, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de decidir, caso por caso, si la privación de libertad es arbitraria o no, a pesar de la puesta en libertad de la persona interesada. Atendiendo a la larga privación de la libertad y a los argumentos que siguen, el Grupo de Trabajo decide emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la detención de Basilia Ucan Nah.

35. Desde luego y como lo ha sostenido en numerosas opiniones, el Grupo de Trabajo no tiene ninguna posibilidad de evaluar las pruebas invocadas en un juicio, ni de parte de la acusación ni de la defensa, razón por la cual sólo podrá referirse a algunas denegaciones de derechos que aparecen manifiestas tanto de los antecedentes proporcionados por la fuente, como de la propia respuesta del Gobierno.

36. El Gobierno no ha controvertido que Ucan Nah estuvo privada de libertad desde el 18 de marzo de 2008, día en que fue arrestada por la policía judicial del Estado de Quintana Roo, hasta el 24 de mayo de 2011, es decir, durante más de tres años y dos meses. Esta dilación constituye una denegación del derecho humano a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable.

37. La dilación del juicio por más de tres años importó un desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia que corresponde a todas las personas.

38. Tampoco contó con un intérprete, como lo exige el apartado f) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más aún: fueron numerosas las diligencias que se realizaron sin la intervención de un intérprete, como lo afirma la fuente, hecho que no ha sido controvertido por el Gobierno.

39. Todos los recursos, incluidas acciones de amparo que a lo largo de los tres años presentó la defensa de la detenida, fueron inefectivos, pues ninguno de ellos logró que, al menos, se la juzgara en libertad, que debe ser la regla general en los juicios penales, conforme al párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.

40. A juicio del Grupo de Trabajo, estas violaciones de las normas del debido proceso que se han mencionado son de una gravedad tal que confieren a la privación de libertad carácter arbitrario, lo que está contemplado dentro de la categoría III en los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo (A/HRC/16/47, anexo; párr. 8 c).

Opinión del Grupo de Trabajo

41. A la luz de lo que antecede, el Grupo de Trabajo decide:

a) Archivar el caso en virtud de la liberación de Basilia Ucan Nah y según lo dispuesto por el apartado a del párrafo 17 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo; precisando no obstante que considera que en la privación de la libertad de esta persona se han violado los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el párrafo 3 del artículo 2 y los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y que en consecuencia su detención fue arbitraria según la categoría III de las categorías aplicadas por el Grupo de Trabajo en la consideración de los casos que le son sometidos;

b) Consecuente con la opinión emitida, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos disponga una reparación por el mal causado por las arbitrariedades de que da cuenta esta opinión.

[Aprobada el 1º de septiembre de 2011]